

JUZGADO MERCANTIL N. 5 DE BARCELONA
--

Procedimiento núm. 755/2024

Objeto: acción social de responsabilidad societaria art. 238 TRLSC

Demandante: INVERSIONES PICO ESPADAS, S.A. (Grupo CELSA)

- Procurador: Ángel Quemada Cuatrecasas
- Abogado: Rodrigo López González

Demandado: Francesc R. R.

- Procurador: Carlos Montero Reiter
- Abogado: Daniel Irigoyen Fujiwara

SENTENCIA

Magistrado titular que dicta la resolución: Florencio Molina López

En Barcelona, a 26 de junio de 2025

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha 15 de julio de 2024, tuvo entrada en este Juzgado demanda de juicio ordinario interpuesta por el Procurador D. Ángel Quemada Cuatrecasas, en nombre y representación de la mercantil INVERSIONES PICO ESPADAS, S.A., frente a D. Francesc R. R., en ejercicio de acción social de responsabilidad al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 del TRLSC, con el siguiente suplico:

a) declare que D. FRANCESC R. R., en su condición de representante persona física de AFINTEX DESARROLLOS GLOBALES, S.L., Consejera Delagada de las PICOs, es responsable del daño ocasionado a mi mandante en virtud de la acción social de responsabilidad de administradores, ex. artículo 238 LSC;

b) condene a D. FRANCESC R. R., en consecuencia, a indemnizar a mi mandante el importe total de los daños causados, que ascienden, a la suma total de 504.550.345 €, más los intereses que se devenguen desde la fecha de interposición de la presente demanda hasta la plena satisfacción de la deuda reclamada;

c) condene en costas al Demandado.

Segundo.- Admitida a trámite la demanda por Decreto de 9 de agosto de 2024, fue emplazado el demandado, D. Francesc R. R., quien compareció en forma mediante el Procurador D. Carlos Montero Reiter, oponiéndose íntegramente a la pretensión deducida de contrario, mediante escrito de contestación presentado en plazo.

Tercero.- Se convocó audiencia previa, que tuvo lugar el día 2 de febrero de 2025, con asistencia de ambas partes. Se ratificaron los escritos de demanda y contestación, fijándose los hechos controvertidos y admitiéndose la siguiente prueba, además de la respectiva documental:

Por la parte actora:

- Interrogatorio del demandado, D. Francesc R. R..
- Testifical de D. M. F. F., asesor financiero de los acreedores.
- Testifical de D. P. O. O., director de recursos humanos.
- Informe pericial de KPMG sobre el crédito intragrupo y su impacto patrimonial (perito Sr. Rábano).
- Informe pericial de FTI Consulting sobre el borrado masivo de información (perito Sra. Blasco).

Por la parte demandada:

- Testifical de D. F. M., alto directivo del Grupo CELSA.
- Testifical de D. J. C. O., alto directivo del Grupo CELSA.
- Informe pericial de BDO Auditores sobre la deuda intragrupo y su tratamiento contable y financiero (perito Sr. Vargas).

Se señaló la fecha del juicio para el día 16 de junio de 2025.

Cuarto.- El acto del juicio tuvo lugar en la fecha señalada, en audiencia pública, con asistencia de todas las partes y con la práctica de la prueba admitida. Ambas representaciones formularon sus conclusiones definitivas, quedando los autos vistos para sentencia.

Quinto.- De la presente resolución se da cuenta al Pleno del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona, de conformidad con el protocolo de Estatuto del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona, aprobado por acuerdo de 15

de julio de 2014 de la Comisión Permanente del CGPJ y revisado por Acuerdo de la Comisión Permanente CGPJ de 18 de febrero de 2016.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Hechos probados.

1. A partir del conjunto de prueba documental, testificales y periciales practicadas en autos, son hechos relevantes para resolver el presente litigio y no controvertidos entre las partes (ex art. 281.3 LEC) o que han quedado debidamente acreditados con el material probatorio, los siguientes hechos:

1.1 D. Francesc R. R. formó parte del Consejo de Administración de la sociedad Inversiones Pico Espadas, S.A., desde su constitución en el año 2017 hasta su cese el día 30 de noviembre de 2023. Su nombramiento como consejero se produjo en representación de la sociedad Afintex Desarrollos Globales, S.L., una de las denominadas sociedades patrimoniales o holding familiares, titular en ese momento del 100 % del capital social de dicha sociedad. Durante todo el periodo mencionado, el Sr. R. ejerció funciones de administración, deliberación y decisión en el seno del órgano colegiado de la sociedad, participando en la adopción de decisiones estratégicas vinculadas al funcionamiento y posición financiera de la entidad en el contexto del Grupo CELSA. Además, desde el mes de noviembre de 2010, también ostentó el cargo de miembro del Consejo de Administración de las sociedades patrimoniales del Grupo CELSA, en calidad de sucesor del socio fundador, su padre, D. F. R. V.. En estas funciones, D. Francesc. R. R. formó parte activa de los órganos de gobierno de las entidades que integraban la estructura de tenencia y control societario del Grupo CELSA.

1.2 Hasta el día 4 de septiembre de 2023, fecha en la que fue homologado judicialmente por Auto del Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Barcelona el Plan de Reestructuración promovido por los acreedores financieros del Grupo CELSA, Sr. R. junto con sus hermanos, ostentaba la titularidad indirecta de la totalidad del capital social de las empresas operativas del grupo, incluyendo Barna Steel, S.A. e IPO Wire Holdings, S.A. Esta titularidad se articulaba a través de una estructura societaria en cascada: las acciones de las sociedades operativas estaban en manos de las sociedades PICOs (Inversiones Pico Espadas, S.A., entre otras), las cuales eran, a su vez, íntegramente participadas por tres sociedades patrimoniales - Afintex Desarrollos Globales, S.L., Ania Recursos Inversores, S.L. y Gestión Empresarial Bages, S.L.- controladas en última instancia por los hermanos R.. Por tanto, los miembros de la familia R. ejercían el control económico y societario efectivo del Grupo CELSA a través de esta red de sociedades holding hasta que dicha estructura fue disuelta con la entrada de los acreedores en el capital de las PICOs como consecuencia del citado Plan de Reestructuración.

1.3 El denominado crédito intragrupo, por importe nominal de 469 millones de euros más los intereses devengados, tuvo su origen en una serie de transacciones realizadas por diversas empresas del Grupo CELSA durante el periodo comprendido entre los años 2006 y 2009. Dichas operaciones formaron parte de un proceso interno de reorganización societaria cuyo objetivo fue la separación patrimonial y funcional de las actividades industriales vinculadas al sector siderúrgico - continuadas por el Grupo CELSA- y las actividades del sector farmacéutico, que quedaron bajo control del hermano de D. Francesc R. V., D. J. M. R. V.. Las operaciones que dieron lugar al citado crédito intragrupo fueron registradas contablemente en la estructura del grupo como deuda a favor de las entidades que pasarían a conformar posteriormente las denominadas sociedades PICOs, y como deuda a cargo de las sociedades patrimoniales familiares que, a su vez, ostentaban la condición de accionistas de las sociedades industriales. Este crédito se ha mantenido en la contabilidad del grupo desde entonces, sin haber sido objeto de compensación, novación, reclamación o ejecución.

1.4 Este crédito intragrupo por importe de 469 millones fue objeto de reconocimiento y tratamiento en los distintos procesos de refinanciación del Grupo CELSA formalizados en los años 2010, 2013 y 2017. Estas refinanciaciones, promovidas de forma conjunta por el Grupo CELSA y sus principales entidades acreedoras, se articularon a través de acuerdos multilaterales que implicaron la revisión y reestructuración de la deuda financiera del grupo.

1.5 En particular, en la refinanciación del año 2017, homologada judicialmente por Auto del Juzgado de lo Mercantil n.º 9 de Barcelona en fecha 13 de diciembre de 2017, se incluyó expresamente el referido crédito intragrupo como parte del entramado financiero del grupo y se establecieron sus efectos en la estructura de balance de las distintas entidades implicadas. En este contexto, el crédito fue asumido por las recién constituidas sociedades PICOs como activo frente a las sociedades patrimoniales, y simultáneamente se vinculó a la operativa del denominado “Instrumento Convertible”, mediante el cual las PICOs asumían también la deuda no sostenible del grupo, por importe de 1.248 millones de euros. Este reconocimiento sucesivo del crédito en los procesos de refinanciación refleja su incorporación estructural al pasivo del grupo y su permanencia en los estados financieros consolidados.

1.6 La refinanciación del año 2017, fue resultado de una ingeniería financiera y societaria conocida/promovida por los asesores de los acreedores financieros, adoptándose una estructura compleja cuyo diseño contemplaba una triple operación:

- en primer lugar, la constitución de tres nuevas sociedades holding denominadas Holdco 1, Holdco 2 y Holdco 3 (las denominadas sociedades PICOs), que se interpondrían entre las sociedades patrimoniales accionistas (Afintex, Ania y Bages) y las sociedades cabeceras operativas del Grupo CELSA (Barna Steel, S.A. e IPO Wire Holdings, S.A.);

- en segundo lugar, la aportación por parte de las sociedades patrimoniales a las nuevas sociedades PICO de las acciones representativas del capital social de las sociedades operativas del grupo; y,

- en tercer lugar, la asunción por parte de las sociedades PICO de la denominada deuda no sostenible, por importe de 1.248 millones de euros, originariamente vinculada a Barna Steel y al conjunto del Grupo CELSA, mediante el instrumento contractual denominado “Instrumento Convertible”.

1.7 Esta operación de asunción de deuda (en favor, también, de los acreedores financieros, en última instancia) fue garantizada con múltiples instrumentos colaterales: prendas pignoraticias sobre las acciones de las propias sociedades PICO y de todas las sociedades industriales del grupo; hipotecas sobre activos inmobiliarios; prendas sin desplazamiento sobre existencias y materias primas; así como prendas sobre derechos de crédito. Esta reestructuración en 2017 permitió, por un lado, liberar a Barna Steel y al resto del grupo operativo de una carga financiera que se consideraba impagable y, por otro, trasladar dicha deuda a las sociedades PICO, a la vez que estas pasaban a ser acreedoras del crédito intragrupo frente a las sociedades patrimoniales por el mismo importe. De esta forma, el Grupo CELSA saneó sus fondos propios, y se reforzó su viabilidad a corto y medio plazo, sin que se produjera una entrada directa de liquidez.

La cláusula 4.3.D del Acuerdo de Refinanciación de 2017 reflejó esta operativa, explicitándose el referido crédito intragrupo objeto de la presente controversia:

(D) HoldCo 1 y HoldCo 2 asumirán, con efectos plenamente liberatorios para los Accionistas, la deuda que éstos tienen con Barna Steel por un importe aproximado de 469.993.633,33 € (el “**Crédito a Compensar 1**”). El Grupo Celsa ha dado soporte documental al Crédito a Compensar 1 y dicho soporte se adjunta como Anexo 4.3(D) a este Acuerdo de Refinanciación.

Se generará de esta forma un crédito intragrupo de HoldCo 1 y HoldCo 2 frente a los Accionistas por el importe del Crédito a Compensar 1.

1.8 Las sociedades patrimoniales (Afintex Desarrollos Globales, S.L., Ania Recursos Inversores, S.L. y Gestión Empresarial Bages, S.L.) y las sociedades PICO (Inversiones Pico Espadas, S.A., entre otras) carecen de estructura operativa, medios personales, recursos materiales o activos productivos propios. Su única actividad efectiva consiste en la tenencia de acciones representativas del capital social de otras entidades del Grupo CELSA, actuando como meros vehículos de inversión o sociedades holding sin operativa comercial ni industrial. Esta situación de inactividad ha sido constante desde su constitución y se ha prolongado, en el caso de las sociedades patrimoniales, durante al menos catorce años, tal como consta en los informes aportados a las actuaciones. En todo este tiempo, estas entidades no han desarrollado actividad mercantil propia ni han generado ingresos, actuando exclusivamente como intermediarias en la titularidad y transmisión de participaciones sociales del grupo. Esta ausencia de actividad se ha reflejado igualmente en sus cuentas anuales, sin variaciones relevantes en sus balances salvo aquellas derivadas de operaciones intragrupo.

1.9 En el marco del procedimiento de homologación del Plan de Reestructuración del Grupo CELSA promovido por sus acreedores financieros en el año 2023 ante el Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Barcelona, los informes técnicos de valoración y viabilidad económica que sirvieron de base para la formulación y aprobación del plan no contemplaron ni incluyeron como activo realizable o recuperable el crédito intragrupo de 469 millones de euros más intereses titularidad de las sociedades PICOs frente a las sociedades patrimoniales. Dichos informes, elaborados por expertos independientes, establecieron las proyecciones financieras y escenarios de recuperación de deuda en función de otros activos del grupo y sin considerar el eventual cobro del referido crédito. Esta exclusión expresa del crédito intragrupo en las hipótesis financieras del plan fue conocida y aceptada por las partes intervinientes en el proceso, incluyendo tanto a los administradores del grupo como a los acreedores que posteriormente se convertirían en accionistas de las sociedades PICOs.

1.10 Así, el deterioro contable tanto del crédito intragrupo de 469 millones de euros, titularidad de las sociedades PICOs frente a las sociedades patrimoniales, como de la deuda no sostenible asumida mediante el denominado “Instrumento Convertible”, fue anticipado y documentado en distintos informes profesionales en el contexto del Plan de Reestructuración de 2023. Por ejemplo, en el informe emitido por la firma Deloitte con fecha 24 de abril de 2023, presentado en el procedimiento de homologación judicial seguido ante el Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Barcelona, se indicó expresamente que, dada la imposibilidad de recuperación del crédito, se procedería a su deterioro contable completo en los estados financieros de las PICOs. Posteriormente, dicha previsión se concretó en la auditoría de cuentas anuales del ejercicio 2023 de la sociedad Inversiones Pico Espadas, S.A., elaborada por Ernst & Young y aportada como anexo 10 al Documento n.º 41-D, en la que se reflejó efectivamente el deterioro al 100 % tanto del referido crédito como de la deuda asumida, tras la toma de control por parte de los acreedores financieros. Ambos documentos coinciden en la evaluación de la nula expectativa de cobro y en la necesidad de reflejar su pérdida de valor en los estados contables.

1.11 El día 30 de noviembre de 2023, como consecuencia de la ejecución del Plan de Reestructuración homologado judicialmente por Auto del Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Barcelona de fecha 4 de septiembre de 2023, los acreedores financieros del Grupo CELSA capitalizaron sus créditos y se convirtieron en accionistas únicos de las sociedades PICOs, incluyendo Inversiones Pico Espadas, S.A. Dicha operación supuso el cambio de control efectivo del grupo empresarial, y tuvo como efecto directo la pérdida del único activo relevante que conservaban las sociedades patrimoniales - las acciones representativas del capital social del Grupo CELSA -. Como consecuencia de esta pérdida patrimonial, las sociedades patrimoniales fueron declaradas en concurso de acreedores por el Juzgado de lo Mercantil n.º 11 de Barcelona. Los procedimientos concursales fueron tramitados con calificación de fortuitos y concluidos mediante Autos dictados los días 10 y 12 de julio de 2024, una vez constatada la falta de masa activa y la imposibilidad de atender sus pasivos.

1.12 El crédito intragrupo de 469 millones, asumido por las sociedades PICOs frente a las sociedades patrimoniales en el marco de la refinanciación de 2017, estaba sujeto a un régimen de vencimiento condicionado contractualmente. En particular, conforme a lo establecido en el contrato de cesión y reconocimiento del crédito suscrito entre las entidades del grupo, se pactó que dicho crédito vencería el 31 de octubre de cada ejercicio, salvo que mediara una declaración expresa de prórroga por parte de la sociedad acreedora antes de dicha fecha. En la práctica, durante los ejercicios 2020, 2021 y 2022, la sociedad Inversiones Pico Espadas, S.A., en su condición de acreedora, no ejercitó acción alguna tendente al vencimiento o reclamación formal del crédito, prorrogando tácitamente su vigencia de forma sucesiva durante tres ejercicios anuales. Esta circunstancia ha sido acreditada mediante la documentación contable y societaria aportada por las partes, sin que conste la adopción de medidas de exigencia, ejecución o novación en ese periodo.

1.13 El crédito intragrupo de 469 millones era conocido tanto por las sociedades acreedoras (las sociedades PICOs) como por las sociedades deudoras (las sociedades patrimoniales), así como por los órganos de administración del grupo y por los acreedores financieros que participaron en las sucesivas refinanciaciones de 2010, 2013 y 2017. A pesar de su inclusión contable, dicho crédito no fue objeto de reclamación ni por vías judiciales ni extrajudiciales a lo largo de más de quince años, ni por las propias sociedades del grupo ni por terceros. Asimismo, durante el desarrollo del Plan de Reestructuración de 2023, los acreedores financieros - que ostentaban derechos de prenda sobre las acciones de las sociedades PICOs como garantía de la deuda asumida por estas mediante el Instrumento Convertible - no ejercitaron ni promovieron la ejecución de tales garantías, optando en su lugar por promover y someter a homologación judicial una solución de reestructuración global que no contemplaba el cobro del citado crédito intragrupo.

1.14 Esta actitud sostenida y consentida a lo largo del tiempo por todos (deudores, administradores sociales, acreedores financieros, etc.) ha sido coherente con la calificación contable del crédito como activo sin expectativa de realización y ha estado fundamentada en la naturaleza estructural y la situación patrimonial de las sociedades deudoras, así como en los equilibrios internos del grupo empresarial.

1.15 Finalmente, en el contexto de los trabajos de análisis pericial encomendados por la parte actora tras la toma de control por los acreedores, se identificó la existencia de una pérdida/borrado masivo de información contenida en los servidores del Grupo CELSA. Esta eliminación de datos fue detectada por el equipo técnico de FTI Consulting, cuyo informe pericial fue incorporado a las actuaciones y ratificado en juicio. Según dicho informe, se constató que, en fechas próximas al relevo en el control del grupo derivado del Plan de Reestructuración homologado en 2023, se procedió al borrado/eliminación/pérdida de múltiples correos electrónicos, documentos de trabajo y archivos almacenados en los servidores de las sociedades del grupo, afectando especialmente a contenidos relacionados con las sociedades PICOs y patrimoniales, así

como con decisiones de órganos de administración. El análisis pericial dejó constancia de que los accesos y operaciones detectadas correspondían a usuarios con altos niveles de privilegio en el sistema. El contenido eliminado no ha podido ser recuperado de forma íntegra.

Segundo.- Posiciones de las partes y objeto de la controversia.

2. La parte actora, Inversiones Pico Espadas, S.A., formula una acción social de responsabilidad conforme al artículo 238 del TRLSC, dirigida contra el que fuera miembro del Consejo de Administración, el Sr. R.. Alega que el demandado incurrió en una omisión antijurídica por no acordar el vencimiento ni instar la reclamación del crédito intragrupo durante los ejercicios 2020, 2021 y 2022, a pesar de que dicho crédito era, a juicio de la actora, exigible y relevante para el patrimonio social dada la situación financiera del grupo. La parte demandante sostiene que dicha omisión supuso una infracción de los deberes de diligencia y lealtad, en tanto habría beneficiado a sociedades patrimoniales vinculadas al propio demandado y perjudicado directamente al patrimonio de la sociedad demandante.

3. La cuantía del daño reclamado se cifra en 504.550.345 euros, correspondiente al valor nominal del crédito que, según la demanda, pudo y debió haberse reclamado. La parte actora sostiene que la condición de vencimiento se producía tácitamente cada 31 de octubre, salvo reclamación, y que la reiteración de las prórrogas durante tres ejercicios consecutivos se realizó sin justificación objetiva. Añade que la situación financiera del grupo desde 2020 hacía necesaria la recuperación de cualquier activo posible, lo que habría impuesto el deber de proceder contra las sociedades patrimoniales deudoras o, en su caso, explorar acciones contra sus socios o contra el patrimonio aportado por estos.

4. En su defensa, el demandado niega toda responsabilidad, cuestionando tanto la exigibilidad del crédito intragrupo como la existencia de un daño real y evaluable. Alega que las sociedades deudoras carecían de activos y de actividad económica desde hacía más de una década, siendo pública y notoria su insolvencia técnica. Manifiesta que reclamar judicialmente dicho crédito no habría producido efectos útiles, ni generado liquidez alguna en favor de la sociedad actora. Rechaza que la omisión imputada constituya una infracción de los deberes de diligencia o lealtad, en tanto las decisiones adoptadas en el Consejo se habrían orientado a preservar la estabilidad del grupo en procesos complejos de refinanciación y reestructuración.

5. Asimismo, la parte demandada señala que los actuales accionistas de la sociedad actora - antiguos acreedores financieros - fueron conocedores de la naturaleza del crédito intragrupo y consintieron su mantenimiento sin ejecución durante los procesos de reestructuración de 2017 y 2023. Aduce que la decisión de no reclamar se enmarcó en una estrategia conjunta y compartida por todos los actores implicados en la

viabilidad del grupo CELSA, negando que se tratara de una actuación singular o imputable exclusivamente a su persona.

6. Finalmente, el demandado rechaza la conexión entre la supuesta omisión y el eventual daño alegado, negando la existencia de relación causal directa. Considera, además, que la acción se ha promovido por los actuales accionistas exclusivamente en interés propio, tras adquirir el control del grupo, y no en interés de la sociedad actora en el momento de los hechos discutidos.

7. En definitiva, el objeto de la controversia queda centrado en determinar si la conducta del demandado durante los ejercicios 2020 a 2022, consistente en no declarar vencido ni reclamar el crédito intragrupo, constituye una omisión antijurídica imputable a su actuación como administrador; si tal conducta causó un perjuicio patrimonial efectivo a Inversiones Pico Espadas, S.A.; y si existe relación de causalidad entre dicha omisión y el daño alegado.

Tercero.- Acción social de responsabilidad: normativa y jurisprudencia.

8. En principio, un administrador no debe responder personalmente de las deudas sociales salvo que en el desempeño de su cargo haya incurrido en algún tipo de culpa o negligencia. En tal caso, hay dos tipos de acciones de responsabilidad que se pueden ejercitar contra los administradores: por un lado, las acciones de responsabilidad por daños entre las que, a su vez, se pueden distinguir la acción social de responsabilidad del y la acción individual y por otro, la acción de responsabilidad por deudas. La diferencia entre ambos tipos de acciones es importante: mientras que en las acciones de responsabilidad por daños el actor debe acreditar un acto (acción u omisión) imputable al administrador (de hecho o de derecho), que el mismo sea contrario a la ley o a los estatutos y que, a consecuencia del mismo, se haya causado un daño directo (que no meramente reflejo), a la sociedad (acción social) o a un socio o tercero (acción individual), la acción de responsabilidad por deudas se configura como una acción de responsabilidad cuasi objetiva debiendo el actor probar únicamente que la sociedad estaba incurso en causa legal de disolución y que, pese a ello, el administrador no convocó junta general de socios para promover la disolución de la sociedad en el plazo de dos meses, debiendo responder de las deudas sociales que se hayan podido generar a partir de ese momento, presumiéndose que son posteriores salvo que el demandado desvirtúe tal presunción.

9. El art. 238 TRLSC señala, bajo la rúbrica “acción social de responsabilidad”:

“1. La acción de responsabilidad contra los administradores se entablará por la sociedad, previo acuerdo de la junta general, que puede ser adoptado a solicitud de cualquier socio aunque no conste en el orden del día. Los estatutos no podrán establecer una mayoría distinta a la ordinaria para la adopción de este acuerdo.

2. En cualquier momento la junta general podrá transigir o renunciar al ejercicio de la acción, siempre que no se opusieren a ello socios que representen el cinco por ciento del capital social.

3. El acuerdo de promover la acción o de transigir determinará la destitución de los administradores afectados.

4. La aprobación de las cuentas anuales no impedirá el ejercicio de la acción de responsabilidad ni supondrá la renuncia a la acción acordada o ejercitada”.

10. Por tanto, para estimar dicha acción, corresponde al demandante la carga de acreditar la concurrencia de los siguientes requisitos:

1) Que se haya causado un daño o perjuicio directo al patrimonio social.

2) Que el administrador haya cometido un acto u omisión doloso o culposo en el ejercicio de las funciones propias del cargo.

3) Que ese acto sea contrario a la ley, a los estatutos, al reglamento de la junta o con infracción de los deberes inherentes al cargo.

4) Que haya una relación causal entre el acto doloso o negligente y el daño o perjuicio causado.

11. La acción social de responsabilidad es una acción de carácter indemnizatorio que pretende el resarcimiento de los daños directos que la sociedad ha sufrido como consecuencia de la actuación de los administradores. Aunque se deriven daños indirectos para los socios o los acreedores sociales, la indemnización que en su caso se fije en la sentencia, o en su ejecución, se destina a engrosar el patrimonio social, que es el patrimonio directamente dañado, no el de los socios o acreedores.

12. La STS de 31 de marzo de 2023 (ROJ: STS 1290/2023 - ECLI:ES:TS:2023:1290) recuerda:

“1.- Mediante la acción social de responsabilidad se trata de reparar los daños que hubiesen podido provocar en el patrimonio social, de modo directo, las acciones u omisiones ilegales, contrarias a los estatutos o incumplidoras de sus deberes por parte de los administradores, siempre que hubiese mediado un nexo causal entre la conducta ilícita de éstos y el menoscabo sufrido por la sociedad administrada (sentencias 477/2010, de 22 de julio; 760/2011, de 4 de noviembre; 391/2012, de 25 de junio; 732/2014, de 26 de diciembre; 281/2017, de 10 de mayo; 221/2018, de 16 de abril; y 889/2021, de 21 de diciembre)”.

13. Por su parte, la STS de 10 de diciembre de 2020 (ROJ: STS 4072/2020 - ECLI:ES:TS:2020:4072) señala:

“1.- Hemos declarado de modo reiterado (por todas, sentencias 253/2016, de 18 de abril, 472/2016, de 13 de julio, 129/2017, de 27 de febrero, y 150/2017, de 2 de marzo) que la acción individual de responsabilidad de los administradores supone una especial aplicación de la responsabilidad extracontractual integrada en un marco societario,

que cuenta con una regulación propia (art. 241 TRLSC), que la especializa respecto de la genérica prevista en el art. 1902 CC. Se trata de una responsabilidad por ilícito orgánico, entendida como la contraída por el administrador social en el desempeño de sus funciones del cargo.

En principio, del daño causado a terceros responde la sociedad, sin perjuicio de que ésta pueda repetir contra sus administradores una vez reparado, mediante el ejercicio de la acción social de responsabilidad (arts. 238 a 240 LSC)”.

14. Y respecto de la distinción entre la acción individual y la acción social, la STS de 13 de julio de 2016 (ROJ: STS 3433/2016 - ECLI:ES:TS:2016:3433) manifiesta:

“2. En primer lugar, no debe obviarse que la acción individual de responsabilidad presupone, en contraposición con la acción social de responsabilidad, la existencia de un daño directo al tercero que la ejercita (en este caso un acreedor). Al respecto, sirva la distinción que respecto de una y otra acción se contiene en la sentencia 396/2013, de 20 de junio:

«La jurisprudencia y la doctrina han distinguido en el sistema legal de responsabilidad de los administradores sociales que los daños se causen a la sociedad, o se causen a socios o terceros, generalmente acreedores; y en este último caso, que la lesión sea directa, o que sea indirecta, en cuanto refleja de la causada directamente a la sociedad. [...]

»La exigencia de responsabilidad a los administradores por los daños causados a la sociedad se hace a través de la denominada acción social, que regula el art. 134 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas (actualmente, art. 238 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital). [...]

»La exigencia de responsabilidad por daños causados directamente a los socios o a terceros (señaladamente, a los acreedores) se hace a través de la denominada acción individual, que está regulada en el art. 135 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas (actualmente, art. 241 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital). El texto del precepto explicita claramente el requisito del carácter directo de la lesión resarcible mediante el ejercicio de dicha acción, al disponer: "[n]o obstante lo dispuesto en los artículos precedentes, quedan a salvo las acciones de indemnización que puedan corresponder a los socios y a terceros por actos de los administradores que lesionen directamente los intereses de aquéllos " (énfasis añadido).

»Por esa razón, doctrina y jurisprudencia han excluido que mediante la acción individual pueda el socio exigir al administrador social responsabilidad por los daños que se produzcan de modo reflejo en su patrimonio como consecuencia del daño causado directamente a la sociedad. Para que pueda aplicarse el art. 135 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se requiere la existencia de un daño directo a los socios o a terceros. Si el daño al socio es reflejo del daño al patrimonio social solo puede ejercitarse la acción social de responsabilidad. En tal caso, la

indemnización que se obtenga reparará el patrimonio social y, de reflejo, el individual de socios o terceros. [...]

»Como resumen de lo expuesto, cuando la actuación ilícita del administrador social ha perjudicado directamente a la sociedad, produciendo un quebranto en su patrimonio social o incluso su desaparición de hecho, la acción que puede ejercitarse es la acción social del art. 134 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, dirigida a la reconstitución del patrimonio social, en los términos previstos en tal precepto legal en cuanto a legitimación activa, esto es, legitimación directa de la sociedad y subsidiaria, cumpliéndose ciertos requisitos, de la minoría social o de los acreedores.»

De acuerdo con la reseñada distinción lógica, para que el ilícito orgánico que supone el cierre de hecho (incumplimiento de los deberes de disolución y liquidación de la sociedad) pueda dar lugar a una acción individual es preciso que el daño ocasionado sea directo al acreedor que la ejercita. Esto es: es necesario que el ilícito orgánico incida directamente en la insatisfacción del crédito”.

Cuarto.- Análisis y resolución del caso (I): daños directos al patrimonio social.

15. La primera cuestión jurídica a abordar en este fundamento consiste en determinar si la omisión imputada al demandado, consistente en no declarar vencido ni reclamar el denominado crédito intragrupo durante los ejercicios 2020, 2021 y 2022, ha causado un perjuicio evaluable y directo al patrimonio social de Inversiones Pico Espadas, S.A.

16. Para resolver si existe un daño patrimonial directo, es preciso identificar cuál era la situación activa y pasiva de la sociedad actora en relación con el crédito intragrupo durante los ejercicios objeto del litigio.

17. Tal y como se ha acreditado, Inversiones Pico Espadas, S.A. ostentaba la titularidad formal de un crédito contra las sociedades patrimoniales, por importe nominal de 469 millones de euros más intereses, originado en operaciones de reestructuración interna del Grupo CELSA llevadas a cabo entre los años 2006 y 2009. Este crédito fue asumido contablemente por la sociedad demandante en virtud de la refinanciación homologada en 2017, como contrapartida a la asunción de la deuda no sostenible del grupo y en el marco de una arquitectura financiera conocida/promovida por los acreedores del grupo.

18. Durante los ejercicios 2020, 2021 y 2022, el crédito intragrupo se mantuvo en el balance de Inversiones Pico Espadas, S.A., sin que se adoptara decisión alguna orientada a su vencimiento ni a su reclamación, a pesar de que contractualmente estaba previsto su vencimiento el 31 de octubre de cada ejercicio, salvo manifestación expresa de prórroga.

19. En los tres ejercicios indicados, se produjo una **prórroga tácita por omisión de declaración de vencimiento por parte del consejo de administración**, órgano del que formaba parte el demandado. No consta que se adoptaran decisiones alternativas para evaluar otras opciones de recuperación, cesión, compensación o dación en pago, ni que se hiciera valoración contable del deterioro del crédito hasta el ejercicio 2023.

20. La permanencia del crédito en el activo contable de la sociedad, sin actuaciones dirigidas a su ejecución o realización, coincide con la situación de falta de actividad de las sociedades patrimoniales deudoras, conocidas por todos los órganos de administración del grupo desde al menos 2010. Dichas entidades carecían de activos, ingresos o capacidad operativa, y su única función consistía en la tenencia de las acciones del grupo, las cuales fueron finalmente transferidas a los acreedores financieros en virtud del Plan de Reestructuración de 2023. Esta circunstancia fue igualmente tomada en cuenta por los propios acreedores, quienes, a pesar de ostentar derechos de prenda sobre las acciones de las PICOs, nunca ejercitaron tales garantías en defensa del valor del crédito, sino que propiciaron una solución de reestructuración que prescindía expresamente de su cobro.

21. Los informes periciales y la documental obrante en autos acreditan que ni los órganos de administración del grupo, ni los acreedores financieros - posteriormente accionistas de las PICOs -, ni las propias sociedades acreedoras o deudoras, consideraron en ningún momento el crédito intragrupo como exigible o recuperable.

22. Así se desprende, entre otros, del informe Deloitte de abril de 2023, de la auditoría de Ernst & Young de las cuentas anuales de Inversiones Pico Espadas, S.A. de ese mismo ejercicio, y de la exclusión expresa del crédito en los informes de viabilidad y valoración económica que sirvieron de base al Plan de Reestructuración de 2023. Estas fuentes reflejan una valoración contable y económica uniforme del crédito como deteriorado al 100 %, sin expectativa realista de cobro, lo que fue finalmente reconocido con su eliminación del balance en dicho ejercicio.

23. Así mismo, las conclusiones de los informes periciales aportados en este procedimiento, elaborados por las firmas KPMG (por la actora) y BDO (por la demandada), coinciden en destacar la imposibilidad estructural de recuperación del crédito intragrupo.

24. El informe pericial de KPMG, presentado por la parte actora, subraya que el crédito de 469 millones de euros surgió en un contexto de reorganización empresarial y ha permanecido registrado contablemente sin expectativa real de recuperación desde su origen. KPMG señala que las sociedades patrimoniales deudoras han carecido de actividad y de activos líquidos durante más de una década, lo que impedía, en la práctica, cualquier posibilidad de cobro efectivo. Además, resalta que este crédito fue reiteradamente incluido y aceptado en las sucesivas refinanciaciones del grupo, sin que se instara su ejecución ni por la sociedad acreedora ni por los acreedores financieros que conocían su existencia.

25. Señala KPMG:

- apartado 86 *“Hemos identificado documentación que evidencia la incapacidad e inexistente intención por parte de las Sociedades Patrimoniales del Sr. R. de atender al pago del Crédito generado, principalmente en el periodo 2006 – 2009, con motivo de salidas de tesorería de las Sociedades del Grupo Celsa a favor de las Sociedades Patrimoniales del Sr. R.”;*

- apartado 87: *“Dicha incapacidad de pago tiene como origen el carácter meramente patrimonial de las Sociedades Patrimoniales de la Familia R. y la carencia de actividad, por parte de las Sociedades Patrimoniales, distinta a la de sociedades tenedoras de las participaciones de las sociedades del Grupo Celsa mediante la que pudieran obtener ingresos para pagar el Crédito”.*

- apartado 124: *“Sobre la base de lo anterior, a partir del análisis de la evolución económica y financiera de las Sociedades Patrimoniales del Sr. R., concluimos que Afintex, Ania, Bages y SHH son Sociedades Patrimoniales de la Familia R. empleadas como vehículos de inversión mediante las que poseían las participaciones de las sociedades del Grupo Celsa y que no desarrollaban ninguna actividad distinta a la tenencia de dichas participaciones mediante la que pudieran generar ingresos con los que atender al pago del Crédito”*

26. Por su parte, el informe pericial elaborado por BDO, aportado por la parte demandada, concluye en el mismo sentido que la condición financiera de las sociedades deudoras - sin ingresos, sin activos de explotación y sin capacidad de generar flujos de caja - hacía inviable cualquier reclamación eficaz del crédito intragrupo. BDO sostiene que la inexistencia de recursos patrimoniales de las sociedades patrimoniales no solo impedía la satisfacción de la deuda, sino que además hubiera supuesto costes adicionales para la sociedad acreedora en caso de interponer acciones legales.

27. Asimismo, el informe BDO apunta que las prórrogas sucesivas no alteraban esta situación y que la eventual exigencia del crédito en los ejercicios 2020 a 2022 no habría generado impacto económico alguno a favor de Inversiones Pico Espadas, S.A., por lo que no se habría causado perjuicio evaluable ni se habría omitido una conducta diligente por parte del órgano de administración.

28. Las conclusiones del informe de BDO son categóricas (pág. 23):

** El único activo de las Sociedades Patrimoniales eran las acciones del Grupo Celsa (hasta 2017 directamente de las sociedades operativas, y posteriormente, a través de las sociedades Picos). Por tanto, el único activo que soportaba la Deuda Intragrupo entre 2017 y 2022 eran las propias acciones de las sociedades Picos que, por otro lado, estaban pignoradas en favor de los acreedores financieros del Grupo Celsa.*

** En el contexto, consideramos que la **reclamación de la Deuda Intragrupo por parte del Sr. R.** a las Sociedades Patrimoniales, **habría sido intrascendente a todos los efectos y, por ello, no existiría un daño patrimonial para las Picos, puesto que, independiente de la reclamación, las Sociedades Patrimoniales no habrían podido amortizar la Deuda Intragrupo, y la situación de Inversiones Pico Espadas no habría sido distinta de la actual.***

29. A la luz de estos materiales probatorios técnico-económicos, puede afirmarse que el crédito intragrupo, aunque registrado contablemente como activo de las sociedades

PICOs, presentaba desde su origen un carácter patrimonial esencialmente teórico o nominal, sin correspondencia con una expectativa razonable de cobro o recuperación.

30. Esta situación era no solo conocida, sino considerada y aceptada por todos los agentes implicados en la estructura financiera del Grupo CELSA, incluidos los acreedores financieros, los órganos de administración y las propias sociedades involucradas, tanto acreedoras como deudoras.

31. Esta situación se ha proyectado de forma constante a lo largo de más de una década, y ha sido expresamente asumida en los procesos de refinanciación del grupo, en los que el crédito intragrupo fue incorporado a los estados financieros como elemento de equilibrio contable, pero nunca con la finalidad de su realización efectiva.

32. La ausencia de actuación alguna orientada al cobro del crédito, tanto por los anteriores titulares del capital como por los actuales accionistas - antes acreedores -, refuerza el carácter estructural y asumido de su inexigibilidad.

33. Las auditorías y los informes periciales acreditan que el deterioro contable del crédito fue previsto, planificado y ejecutado de manera coherente con los objetivos del Plan de Reestructuración aprobado judicialmente en 2023. En particular, los informes elaborados por Deloitte, Ernst & Young, BDO y KPMG concluyen que, dadas las condiciones patrimoniales de las sociedades deudoras, la ejecución del crédito resultaba inviable, y que su valor recuperable era nulo. Esta constatación fue compartida tanto en sede judicial como en las deliberaciones societarias que acompañaron la transformación del grupo.

34. En consecuencia, debe concluirse que el mantenimiento del crédito intragrupo en los balances de las sociedades PICOs no constituyó una expectativa legítima de ingreso para la sociedad, ni su inactividad en orden a su cobro puede valorarse, por sí sola, como causante de un menoscabo efectivo en el patrimonio social.

35. La omisión de su reclamación entre los años 2020 a 2022 se inserta en una práctica continuada, sostenida y consentida a lo largo del tiempo por todos (deudores, administradores, acreedores financieros, etc.), sin que existan unos mínimos elementos probatorios que permitan concluir que una actuación distinta del administrador demandado hubiera alterado el resultado final ni generado ingreso alguno para la sociedad actora. La pérdida de valor del crédito no es atribuible a su falta de ejercicio formal, sino a su propia naturaleza estructural y a la imposibilidad material de cobro reconocida y asumida por todos los operadores implicados.

36. Como bien señala la representación de la demandada, es extrapolable a nuestro análisis jurídico de prosperabilidad de la acción social los requisitos exigidos en acciones individuales de responsabilidad, promovidas por acreedores sociales que ven frustradas sus expectativas de cobro como consecuencia de la actuación de los administradores.

37. Así, en acciones individuales de responsabilidad, los tribunales han exigido para apreciar la existencia de un **daño resarcible** que se acredite que, de no haberse

producido la conducta antijurídica atribuida al administrador, hubiera sido posible al acreedor recuperar total o parcialmente su crédito. Así, la STS, de 20 de febrero de 2024 (ROJ: STS 828/2024 - ECLI:ES:TS:2024:828)

“3.- Con carácter general, el impago de una deuda social no resulta directamente imputable al administrador. Ni siquiera cuando la sociedad deviene en causa de disolución por pérdidas y no es formalmente disuelta, a no ser que conste que caso de haberlo sido, sí hubiera sido posible al acreedor hacerse cobro de su crédito. Para ello hay que hacer un esfuerzo cuando menos argumentativo (sin perjuicio de trasladarle a los administradores las consecuencias de la carga de la prueba de la situación patrimonial de la sociedad en cada momento), por ejemplo sobre la liquidación o distracción de activos al margen de las previsiones legales sobre disolución y liquidación.

Es indudable que el incumplimiento de los deberes legales relativos a la disolución de la sociedad y a su liquidación, constituye un ilícito orgánico grave del administrador y, en su caso, del liquidador. Pero, para que prospere la acción individual en estos casos, no basta con que la sociedad hubiera estado en causa de disolución y no hubiera sido formalmente disuelta, sino que es preciso acreditar algo más, que de haberse realizado la correcta disolución y liquidación sí hubiera sido posible al acreedor hacerse cobro de su crédito, total o parcialmente. Dicho de otro modo, más general, que el cierre de hecho impidió el pago del crédito.

[..]

Pero aunque el esfuerzo argumentativo es notable, [...], se desprende que una liquidación ordenada de la sociedad no hubiera garantizado, ni siquiera de forma parcial, el cobro del crédito del demandante”.

38. Como antes razonamos, no hay prueba consistente alguna que acredite que si el demandado hubiera dado por vencido el crédito intragrupo o instado su reclamación durante los ejercicios 2020 a 2022, la actora habría ingresado o recuperado seria, efectiva y realmente todo o parte del mismo.

39. Finalmente, un supuesto con cierto paralelismo al presente, en un contexto también de cambio de control de la empresa y de ejercicio de acción social, lo encontramos en la STS de 12 de enero de 2018 (ROJ: STS 66/2018 - ECLI:ES:TS:2018:66)

“No es admisible que se presente como un daño al patrimonio social que los beneficios obtenidos por la sociedad se hayan hecho llegar a todos sus socios, ni que cuando cambia la composición del accionariado, los nuevos accionistas, que han adquirido su participación en el capital social por un precio acorde al valor que tenía el patrimonio social una vez que esos beneficios habían sido repartidos a los socios, acuerden que la sociedad ejercite una acción social en la que se reclame, como reparación del daño a la sociedad, que se reintegren a esta los beneficios obtenidos por los socios, catorce años antes en el caso de este litigio”.

Quinto. Análisis y resolución del caso (II): acciones dolosas o negligentes ilícitas en el ejercicio del cargo y relación de causalidad con el daño al patrimonio social.

40. La conducta que se imputa al demandado, Sr. R., consiste en su omisión de declarar vencido y reclamar el crédito intragrupo que ostentaba Inversiones Pico Espadas, S.A. frente a las sociedades patrimoniales, durante los ejercicios 2020, 2021 y 2022, a pesar de que dicho crédito, conforme a su régimen contractual, era prorrogable anualmente de forma expresa o tácita en ausencia de reclamación.

41. La parte actora sostiene que dicha omisión fue deliberada o, en su caso, negligente, al no adoptar ninguna medida que tendiera a su realización o recuperación, pese al deterioro económico del grupo y a la relevancia contable del crédito en el patrimonio de la sociedad demandante. En consecuencia, se atribuye al demandado una infracción de los deberes de diligencia y lealtad inherentes al cargo de administrador conforme a los arts. 225 y 227 TRLSC.

De la presunta infracción del deber de diligencia

42. El art. 225 TRLSC impone a los administradores el deber de diligencia:

“1. Los administradores deberán desempeñar el cargo y cumplir los deberes impuestos por las leyes y los estatutos con la diligencia de un ordenado empresario, teniendo en cuenta la naturaleza del cargo y las funciones atribuidas a cada uno de ellos; y subordinar, en todo caso, su interés particular al interés de la empresa.

2. Los administradores deberán tener la dedicación adecuada y adoptarán las medidas precisas para la buena dirección y el control de la sociedad”.

43. La actora fundamenta la infracción de este deber en la omisión del demandado de declarar vencido y reclamar el crédito intragrupo y que esta omisión habría privado la misma de unos fondos esenciales para garantizar su viabilidad financiera en un contexto de crisis, configurando así una conducta antijurídica imputable al administrador por falta de diligencia.

44. Sin embargo, tal planteamiento no se sostiene a la luz de los hechos acreditados, del material probatorio y del contexto en que se produjo la actuación del administrador.

45. El crédito intragrupo era conocido por todos los actores del grupo – incluyendo administradores, socios y acreedores financieros– como un crédito estructuralmente inexigible e incobrable, dada la ausencia absoluta de medios, recursos y actividad económica en las sociedades deudoras, que durante más de una década no desarrollaron actividad alguna, limitándose a la tenencia pasiva de acciones del Grupo CELSA.

46. El mantenimiento contable del crédito no respondía a una expectativa real de cobro, sino a razones de estrategia financiera derivadas de los acuerdos de refinanciación de 2017.

47. Reiteradamente, en las auditorías, informes periciales (los antes ya referidos de KPMG, BDO, Deloitte y Ernst & Young) e incluso en los documentos de planificación

estratégica del grupo, se deja constancia de la imposibilidad de recuperar dicho crédito, situación asumida expresamente por los acreedores financieros que conocieron/promovieron tales acuerdos.

48. La omisión imputada al demandado – consistente en no declarar vencido ni reclamar el crédito intragrupo en los ejercicios 2020, 2021 y 2022– no puede calificarse como una actuación negligente o contraria al deber de diligencia establecido en el art. 225 TRLSC. Más bien, el mantenimiento de la prórroga tácita del crédito respondía a una práctica prolongada y conocida por todos los órganos de gobierno del grupo, así como por sus acreedores financieros, **sin que existiera mandato estatutario, contractual ni acuerdo societario que impusiera una actuación distinta.**

49. No consta, además, que en ninguna de las sesiones del consejo de administración o en las deliberaciones societarias se planteara la conveniencia de su reclamación ni se promoviera su vencimiento. La actuación del administrador, en este caso, se mantuvo alineada con la estrategia societaria y financiera adoptada por el conjunto del grupo, y no puede considerarse, por tanto, una infracción de sus deberes legales.

50. La conducta del Sr. R. se enmarca más bien en una estrategia empresarial (ex art. 226 TRLSC) adoptada de forma constante y conocida por todos los órganos del Grupo CELSA, sus socios y sus acreedores, consistente en mantener una estructura societaria y financiera orientada a preservar la viabilidad del grupo sin promover litigios internos sobre créditos estructuralmente inexigibles.

51. La decisión de no reclamar judicial o extrajudicialmente el crédito intragrupo durante los ejercicios 2020, 2021 y 2022 no puede reputarse negligente ni contraria a una diligencia razonable exigible al administrador, cuando dicha inactividad resultaba plenamente coherente con el equilibrio interno del grupo, con la expectativa generalizada de no recuperación del crédito y con las propias previsiones contenidas en los instrumentos de reestructuración suscritos con los acreedores financieros.

52. La falta de exigencia del crédito no derivó de una omisión arbitraria o irreflexiva, sino de una valoración justificada económica y jurídicamente, alineada con el interés social común a todas las entidades del grupo, y con el consenso de los principales *stakeholders* del mismo.

53. Por todo ello, no puede imputarse al Sr. R. una infracción del deber de diligencia del art. 225 TRLSC por la no reclamación del crédito intragrupo en los ejercicios señalados. La actuación observada se encuadra en los márgenes de discrecionalidad empresarial y de la denominada “*business judgment rule*” (art. 226 TRLSC), al haber sido adoptada en un contexto de especial complejidad económica, con la información disponible, de forma coherente con decisiones anteriores, y sin que se haya acreditado que existiera una alternativa razonable que permitiera salvaguardar mejor el patrimonio de la sociedad. En ausencia de arbitrariedad, falta de información o desvío manifiesto del interés social, no puede apreciarse conducta antijurídica que dé lugar a responsabilidad conforme a los parámetros exigidos por la jurisprudencia para este tipo de acciones.

De la presunta infracción del deber de lealtad

54. El art. 227 TRLSC impone a los administradores el deber de lealtad:

“1. Los administradores deberán desempeñar el cargo con la lealtad de un fiel representante, obrando de buena fe y en el mejor interés de la sociedad.

2. La infracción del deber de lealtad determinará no solo la obligación de indemnizar el daño causado al patrimonio social, sino también la de devolver a la sociedad el enriquecimiento injusto obtenido por el administrador”.

55. La parte demandante sostiene que la conducta del Sr. R. no solo habría vulnerado el deber de diligencia exigible a los administradores sociales, sino también el deber de lealtad, en cuanto se habría producido una omisión deliberada orientada a favorecer los intereses de las sociedades patrimoniales deudoras - de las que el propio demandado era socio y administrador - en perjuicio de la sociedad acreedora, Inversiones Pico Espadas, S.A.

56. Desde esta perspectiva, el reproche de deslealtad formulado en la demanda descansa esencialmente en dos premisas: i) que el administrador se encontraba en una situación de conflicto de interés estructural al participar simultáneamente en sociedades acreedora y deudora del crédito intragrupo; y ii) que la omisión de reclamar el crédito tuvo como efecto práctico preservar el patrimonio de las sociedades patrimoniales, con lo que se habría privilegiado un interés personal sobre el interés social de la entidad administrada.

57. Sin embargo, ambas premisas presentan inconsistencias jurídicas y fácticas relevantes. En primer lugar, no puede sostenerse válidamente que exista conflicto de interés cuando el interés presuntamente concurrente es compartido por todas las entidades implicadas – PICO y patrimoniales –, integradas en una misma estructura societaria y económica, sin presencia de socios minoritarios ni intereses contrapuestos entre ellas.

58. En este sentido, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 15ª, el 23 de febrero de 2024 (ROJ: SAP B 1514/2024 - ECLI:ES:APB:2024:1514) ha subrayado que el deber de lealtad debe analizarse atendiendo al interés social entendido como **interés común de los socios**, el cual, en casos como el presente, resulta unitario y/o convergente:

“[...] El artículo 227.1 TRLSC establece a modo de cláusula general que los administradores deberán desempeñar el cargo con la lealtad de un fiel representante, obrando de buena fe y en el mejor interés de la sociedad. Si "obrar en el mejor interés de la sociedad" define en sustancia lo que debe entenderse como deber de lealtad, es razonable exigir que exista violación del interés social para que pueda existir infracción del deber de lealtad.

26. El interés social no solo está relacionado con los intereses propios de la sociedad como ente independiente y distinto de los socios que la integran, sino que también está relacionado con el interés del conjunto de los socios que integran la sociedad. La

conducta del administrador debe estar orientada al mejor servicio para los intereses del conjunto de los socios que lo nombraron, lo que incluye tanto los que votaron a favor de ese nombramiento como los que votaron en contra. Así hemos venido entendiendo de forma reiterado el concepto de interés social, acogiendo la tesis contractualista del mismo (a título de mero ejemplo puede verse nuestra Sentencia de 21 de junio de 2013 (AC 2013, 1513), que lo identifica con el interés común de los socios”.

59. En segundo lugar, la actuación del administrador, consistente en prorrogar tácitamente el vencimiento del crédito intragrupo durante los ejercicios 2020 a 2022, no puede considerarse una infracción del deber de lealtad en la medida en que dicha conducta se mostró coherente con el interés social prevalente en el seno del grupo empresarial.

60. La decisión de no promover la ejecución del crédito respondía a un contexto de negociación y reestructuración financiera en curso, en el que una acción unilateral contra las sociedades patrimoniales – carentes de activos realizables y titulares indirectas del propio grupo – habría resultado no solo inútil desde el punto de vista económico – tal y como razonamos en el fundamento anterior –, sino potencialmente perjudicial para el equilibrio interno de las relaciones societarias y la estabilidad del grupo.

61. En este sentido, la conducta adoptada por el administrador no puede calificarse como orientada a obtener un beneficio personal injustificado, sino como un ejercicio de coherencia empresarial con lo que se venía haciendo desde hacía diez años y en un entorno de alta complejidad y dependencia mutua entre las entidades afectadas.

62. En tercer lugar, el hecho de que el administrador demandado ostentara indirectamente participaciones en las sociedades deudoras del crédito intragrupo no basta, por sí solo, para configurar un conflicto de interés contrario al deber de lealtad.

63. Tal como recuerda la anteriormente referida Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 15ª, el 23 de febrero de 2024 (ROJ: SAP B 1514/2024 - ECLI:ES:APB:2024:1514), el interés social no puede disociarse artificialmente del interés común de los socios, especialmente en estructuras societarias en las que las sociedades acreedora y deudora forman parte del mismo grupo familiar y carecen de accionistas ajenos.

64. Así, la supuesta contraposición entre el interés de las sociedades PICO y el del administrador resulta más aparente que real, pues la decisión adoptada – no reclamar el crédito en un contexto de inviabilidad y carencia de medios por parte de las deudoras – preservaba tanto el patrimonio del grupo como el interés de todos sus socios.

65. En cuarto lugar, no consta ni se ha acreditado que el administrador obtuviera un beneficio económico directo o indirecto derivado de su actuación omisiva – al menos en los ejercicios enjuiciados de 2020 a 2022 –, lo que debilita aún más la imputación de una infracción del deber de lealtad.

66. Conforme a la doctrina consolidada, la existencia de un beneficio personal a costa de la sociedad administrada constituye un elemento esencial para declarar la ilicitud de la conducta bajo este parámetro (art. 227 TRLSC).

67. En el presente caso, la no reclamación del crédito intragrupo no reportó ventaja patrimonial alguna al demandado ni alteró su posición económica o jurídica respecto de las sociedades patrimoniales deudoras, que seguían careciendo de activos útiles para hacer frente a sus pasivos. La omisión no produjo, por tanto, un sacrificio del interés social en favor de un interés individual.

68. Por lo dicho, debe concluirse que no concurre una conducta antijurídica constitutiva de infracción del deber de lealtad. La actuación del administrador demandado no se separó del interés social entendido como interés común de los socios, ni supuso un aprovechamiento indebido de su posición para obtener un beneficio propio en detrimento del patrimonio de la sociedad. La gestión del crédito intragrupo en los ejercicios 2020 a 2022 se enmarcó dentro de una estrategia empresarial globalmente compartida y conforme con el contexto económico-financiero del grupo, sin que pueda calificarse de desleal en los términos exigidos por el art. 227 TRLSC y por la jurisprudencia aplicable.

Sobre la necesidad de probar la relación causal en términos jurídicos.

69. Aun cuando diéramos por supuesta una conducta antijurídica del administrador demandado así como un daño al patrimonio social de la entidad actora, resultaría imprescindible acreditar el requisito de la relación de causalidad entre ambos elementos.

70. No basta con la constatación meramente física o cronológica de una posible conexión entre la omisión denunciada y el resultado perjudicial; la relación causal debe establecerse conforme a los parámetros de la imputación objetiva, atendiendo a criterios jurídicos que permitan atribuir el daño directamente a la conducta imputada. Así lo ha subrayado la jurisprudencia del Tribunal Supremo, entre otras, la ya referida STS de 31 de marzo de 2023 (ROJ: STS 1290/2023 - ECLI:ES:TS:2023:1290).

71. En el presente caso, la inexistencia de dicho daño resulta del carácter manifiestamente inexigible e incobrable del Crédito-Deuda Intragrupa, lo que hace inviable, tanto en términos jurídicos como económicos, que su eventual reclamación hubiera producido efecto positivo alguno para el patrimonio de las sociedades PICOs, tal y como ya expusimos.

72. El análisis de la relación causal requiere constatar si, de haber actuado el administrador conforme a lo que se le reprocha - esto es, reclamando judicialmente el crédito intragrupo en los ejercicios 2020, 2021 y 2022 -, se habría evitado o minorado el daño efectivamente producido al patrimonio de la sociedad.

73. Tal juicio hipotético exige un enlace lógico y plausible entre la conducta antijurídica y el perjuicio alegado, de modo que quepa afirmar, con razonable probabilidad, que la omisión fue condición necesaria del resultado dañoso. Esta exigencia se ve reforzada por la jurisprudencia que descarta la responsabilidad del administrador cuando, aun

mediando infracción de sus deberes, no existe expectativa alguna de que el crédito hubiera podido cobrarse, como ocurre en supuestos donde la sociedad deudora carece manifiestamente de recursos suficientes (STS, de 20 de febrero de 2024, ROJ: STS 828/2024 - ECLI:ES:TS:2024:828). En el presente caso, ni la estructura societaria ni la realidad económico-financiera de las entidades deudoras permitían vislumbrar expectativa real y efectiva de cobro.

74. Por tanto, no es jurídicamente sostenible imputar al administrador un daño derivado de no haber instado judicialmente el cobro de un crédito respecto de un deudor sin capacidad patrimonial.

75. Admitir que la mera omisión de una reclamación formal de pago, sin expectativa efectiva y real de satisfacción, genere responsabilidad por pérdida patrimonial supondría convertir el presente procedimiento en una acción sancionadora del incumplimiento abstracto de deberes, lo que se aleja de la esencia estrictamente resarcitoria que define la acción social de responsabilidad, desnaturalizándola.

Sexto. Restantes alegaciones de las partes.

Acerca de la eliminación/pérdida de datos del Grupo Celsa.

76. La actora ha invocado en su demanda la eliminación de determinada información contenida en los sistemas informáticos de la sociedad demandante, con fundamento en las conclusiones contenidas en el informe de FTI Consulting. Sin embargo, esta alegación no guarda relación directa ni material con los presupuestos fácticos ni jurídicos que fundamentan el ejercicio de la acción social de responsabilidad de administrador.

77. La actora no vincula de manera concreta y razonada la conducta presuntamente omisiva o dolosa atribuida al demandado con la supuesta desaparición de datos, ni articula argumento alguno que permita concluir que esta eventual eliminación haya determinado o contribuido de manera relevante a la generación de un daño efectivo en el patrimonio social.

78. Mucho menos se acredita que, de no haberse producido tal eliminación de datos, se habría evitado el presunto perjuicio reclamado. En este sentido, ni se individualiza el daño concreto derivado de dicha eliminación, ni se describe qué acción reparadora cabría exigir al administrador demandado. Esta alegación, por tanto, carece de virtualidad para integrar el juicio de imputación causal requerido por la acción social.

79. En definitiva, la alegación relativa al borrado de datos informáticos se presenta como un argumento tangencial, no conectado con el objeto procesal ni con los elementos estructurales de la responsabilidad de los administradores. La invocación de dicha circunstancia, sin concreción, sin nexo causal con la conducta antijurídica alegada y sin que se acredite un daño directamente imputable, resulta inoperante ya para fundar ya para reforzar la acción social ejercitada.

80. En consecuencia, debe quedar fuera del análisis jurídico de este procedimiento, sin perjuicio de las consecuencias jurídicas que puedan derivarse o extraerse en el resto de procedimientos judiciales que las partes tienen pendientes, bien en el ámbito mercantil o bien en la jurisdicción penal.

Acerca de la obligación de los socios de responder del crédito intragrupo.

81. Solicita la actora trasladar a los socios de las Sociedades Patrimoniales - entre ellos el hoy demandado - la obligación de responder por el Crédito-Deuda Intragrupa.

82. En nuestro ordenamiento, las sociedades mercantiles ostentan personalidad jurídica propia e independiente de la de sus socios, con autonomía patrimonial y responsabilidad limitada. Por ello, salvo que concurra un supuesto legalmente tipificado de responsabilidad personal del socio (por ejemplo, fianza, aval, o levantamiento del velo en caso de fraude), los socios no responden con su patrimonio de las deudas sociales.

83. Esta doctrina ha sido reiteradamente reconocida por la jurisprudencia, entre otras, la STS del 20 de junio de 2013 (ROJ: STS 3605/2013 - ECLI:ES:TS:2013:3605):

[...]La pretensión del demandante al exigir directamente a los administradores la parte proporcional que le correspondería en la reintegración del patrimonio social lesionado por la actuación de los administradores es contraria al sistema legal de responsabilidad de los administradores sociales.

No se trata de una cuestión meramente doctrinal o de un rigor formalista carente de justificación racional que sirva para dejar sin respuesta conductas ilícitas de los administradores sociales y sin tutela adecuada a los socios. La pretensión del demandante supone una aplicación indiscriminada de la vía de la acción individual del art. 135 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas que ignora completamente principios básicos del funcionamiento de las sociedades de capital, como son los de personalidad jurídica propia, autonomía patrimonial y responsabilidad por las deudas sociales”.

84. En el presente caso, no se ha acreditado - ni siquiera alegado de forma mínimamente razonada - la existencia de un título jurídico que imponga a los socios de las Sociedades Patrimoniales la obligación de reembolsar el Crédito Intragrupa. Tampoco se sostiene una argumentación seria en torno a la existencia de una garantía personal, ni se articula acción alguna que cuestione la personalidad jurídica de las entidades deudoras.

85. Pretender, como hace la actora, que el administrador debía reclamar judicialmente dicho crédito a los socios, supone soslayar los principios esenciales del Derecho de Sociedades, carece de respaldo normativo y es ajena a la lógica jurídica que rige el régimen de responsabilidad societaria.

Acerca de la doctrina de los actos propios y del ejercicio de la acción social por los nuevos socios.

86. El ejercicio de la presente acción social por parte de los actuales socios de las Sociedades PICOs - los acreedores financieros que capitalizaron sus créditos en virtud

del Plan de Reestructuración homologado judicialmente – no parece resultar muy compatible con sus propios actos previos.

87. Estos socios promovieron, impulsaron y solicitaron judicialmente la homologación del Plan de Reestructuración aprobado por el Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Barcelona, asumiendo de manera expresa tanto la valoración económica del Grupo CELSA como la estructura financiera y patrimonial del mismo, en la que el Crédito-Deuda Intragrupa era tratado como **activo inexigible e irrecuperable**. Así se recogió tanto en los informes de viabilidad, como en las proyecciones económico-financieras y auditorías integradas en el expediente judicial, tal y como antes hemos referido.

88. Resulta por tanto contrario a la doctrina de los actos propios que quienes adoptaron e impulsaron dicha estructura, con pleno conocimiento de la situación del Crédito Intragrupa, quieran ahora impugnarla promoviendo una acción de responsabilidad contra el anterior administrador por no haber reclamado un crédito que ellos mismos conocían inexigible y que, a la postre, calificaron como incobrable y deterioraron contablemente al 100%.

89. Dicha pretensión, a pesar de ser legítima, resulta ciertamente contradictoria con la posición asumida previamente en un procedimiento judicial de reestructuración, convalidado/homologado por resolución firme.

Séptimo. Conclusiones y costas.

90. La acción social de responsabilidad ejercitada contra el Sr. R. se ha sustentado en una presunta omisión dolosa o negligente al no reclamar, durante los ejercicios 2020 a 2022, el denominado Crédito-Deuda Intragrupa por importe superior a 469 millones de euros. No obstante, ha quedado acreditado que dicho crédito era desde su origen inexigible, fue prorrogado tácitamente durante varios años sin reclamación alguna, y era conocido como incobrable tanto por la sociedad demandante, como por sus socios, deudores y acreedores financieros.

91. No concurre infracción del deber de diligencia ni del deber de lealtad en el actuar del demandado en su condición de administrador de la sociedad, ni se ha acreditado que su conducta hubiera causado daño directo y efectivo y real al patrimonio social, exigencia imprescindible para la prosperabilidad de la acción conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo. La reclamación del crédito no solo resultaba improcedente en el contexto económico, financiero y jurídico del grupo CELSA, sino que habría perjudicado el interés social y el de los socios comunes.

92. En consecuencia, al no concurrir los elementos constitutivos de la responsabilidad exigida - conducta antijurídica, daño y relación causal entre ambos -, procede la desestimación de la demanda interpuesta.

93. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 394.1 de la LEC, al haberse desestimado íntegramente la demanda, procede imponer a la actora las costas procesales causadas en esta instancia. No concurre razón que permita apreciar dudas de hecho o de

derecho que justifiquen una excepción al principio del vencimiento objetivo en materia de costas.

FALLO

Desestimo íntegramente la demanda formulada por la representación procesal de la mercantil **INVERSIONES PICO ESPADAS, S.A. (Grupo CELSA)**, **contra D. Francesc R. R.**, absolviendo al demandado de todos los pedimentos formulados en su contra, con expresa imposición de costas a la parte actora.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial de Barcelona, que deberá interponerse en el plazo de veinte días ante este Juzgado, conforme a los artículos 455 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.